

Díaz anuncia una nueva prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA/ El Gobierno abrirá “en breve” la negociación social para extender los ERTE. Sánchez presentará el Plan de Recuperación en el Congreso la próxima semana.

M.Valverde. Madrid

La vicepresidenta Tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió ayer un mensaje de tranquilidad a los empresarios y a los trabajadores afectados por la grave crisis económica provocada por el coronavirus. Díaz anunció que “en breve” llamará a la patronal y a los sindicatos para negociar una nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo. El plazo de extensión de la cobertura de empresarios y trabajadores puede ser hasta el 30 de julio o el 30 de septiembre, a tenor de la ruta seguida hasta ahora por el Gobierno en sus negociaciones con los empresarios y los sindicatos. Bien es verdad que CEOE y Cepyme defienden que la prórroga de los expedientes se amplíe al resto del año.

En todo caso, ante un auditorio de representantes de la pequeña y mediana empresa, Díaz explicó que la intención del Gobierno es aplicar “una fórmula similar” de protección de las empresas y trabajadores, para poder hacer frente a la crisis. Así, el Gobierno ha concedido a las empresas un abanico de recortes de las cotizaciones a las distintas empresas, en función de la situación en la que están ellas



DÍAZ RECIBE AL REY Y SE DESMARCA DE IGLESIAS La vicepresidenta Tercera, Yolanda Díaz, de UP, recibió ayer al Rey Felipe VI, en la cita anual de los premios de Cepyme, y aplaudió puesta en pie, junto a los empresarios, el discurso del monarca. Un respeto institucional muy diferente de los desplantes que hacía Iglesias a don Felipe.

y sus trabajadores. Las bonificaciones pueden ir desde el 75% hasta la totalidad de las cotizaciones sociales. Todo depende de la actividad que pueda tener la empresa, como consecuencia de las medidas del Gobierno y las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia.

Mientras tanto, los trabajadores pueden cobrar la prestación por desempleo, de forma total o parcial. A cambio de que la empresa se comprometa a recuperar a sus em-

pleados, en el momento en el que termine el ERTE, y no despida a nadie hasta seis meses después del expediente. Una cláusula que CEOE lleva tiempo intentando suprimir de los acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto para la próxima negociación con los agentes sociales mejorar los incentivos a las empresas que antes devuelvan el empleo a sus trabajado-

res, que los rescaten del ERTE. El Gobierno tiene la intención de convertir en permanente este sistema de flexibilidad de plantillas, dentro de la reforma laboral que ha comenzado a negociar con la patronal y los sindicatos.

En la entrega anual de los premios Cepyme, Díaz también recordó la protección de los autónomos frente a la crisis económica. La vicepresidenta citó que, al menos, un millón de autónomos han tenido, o tienen, la protección

por desempleo, durante la crisis, lo que se conoce como cese de actividad. Además de otras ventajas como aplazamientos en el pago de impuestos. Precisamente, el Rey Felipe VI, que presidió la entrega de los premios Cepyme, agradeció el esfuerzo de los empresarios durante la crisis. “La gran mayoría habéis continuado, os habéis sacrificado, os habéis esforzado día a día para evitar el cierre de vuestros negocios. Y no lo habéis hecho solamente por mantenerlos, sino porque sabéis que ello es necesario para contribuir a que España avance. Os damos las gracias una vez más”, dijo el monarca. “No lo dudéis –añadió– vuestro trabajo es muy valioso, es necesario y redundante en beneficio de todos”, dijo el monarca. En el mismo acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, agradeció su labor al Rey y pidió al Gobierno “moderación y estabilidad”.

Unos minutos antes, en el Consejo Económico y Social, Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, anunció que la próxima semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el Plan de Resiliencia y Recuperación, frente al Covid-19. Y, con este objetivo, el Gobierno se reunirá con la patronal y los sindicatos.

Calviño revisará hoy a la baja la previsión de PIB de 2021

Expansión. Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunciará hoy una rebaja de sus previsiones de crecimiento para España en 2021. Esto se debe, fundamentalmente, al impacto de la tercera ola de la pandemia del coronavirus en la economía, según declaró ayer Calviño a Bloomberg TV. Por lo tanto, las previsiones de crecimiento para 2020 estarán por debajo del 7,2%, previsto inicialmente. Y, por supuesto, del 9,8%, que había calculado el Gobierno con un buen aprovechamiento de los fondos de recuperación europeos. El Ejecutivo adelantó en los Presupuestos 27.000 millones de euros.

No obstante, Calviño expresó su confianza en que España tenga “un rebote muy fuerte” en el segundo semestre. “Eso es algo que todo el mundo espera”, después de que esta semana el Fondo Monetario Internacional haya revisado al alza sus previsiones para España, hasta un crecimiento del PIB del 6,4% en 2021, el mayor entre las economías avanzadas junto con EEUU. Calviño discrepó de los cálculos del FMI sobre la tasa de paro, y dijo que antes de 2026, España ya habrá rebajado su desempleo a un nivel inferior al 14%, como antes de la crisis.

¿Es tan populista el FMI como Pablo Iglesias?



RADAR MÓVIL

Ricardo T. Lucas

El Fondo Monetario Internacional se ha sumado a los que, habitualmente desde la izquierda radical, quieren crear un impuesto a los ricos y a las grandes empresas para hacerles pagar la factura de la crisis pandémica. ¿Es que se ha contagiado el organismo que dirige Kristalina Georgieva del populismo fiscal de Pablo Iglesias?

Castigar a los ricos y a las grandes empresas es algo que viene clamando el cabecilla de Podemos desde antes del Covid-19, pero a raíz de la crisis sanitaria la ha enarbolado como la solución mágica a la falta de recursos públicos para hacer frente a las con-

secuencias de la depresión pandémica, con el argumento simplón de que “los ricos están deseando pagar más por patriotismo fiscal”. Tal vez lo diga por experiencia propia, a la luz de su sorprendente incremento patrimonial tras apenas un año como vicepresidente del Gobierno y a pesar de la limitación de sueldos impuesta por Podemos a sus dirigentes. También en la precampaña para las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid repite Iglesias este mantra de que subiendo impuestos a los ricos se arreglarían los problemas de la región. Su populismo fiscal es amoldable a cada contexto.

Sin embargo, los diversos intentos en el pasado y en países muy distintos de ordeñar fiscalmente a los “ricos” han demostrado que esta clase de impuestos no funcionan, porque son fácilmente eludibles por quienes

tienen los medios para ello, y porque acaban siendo perjudiciales para las economías, al desincentivar la inversión y el ahorro. La progresiva eliminación del Impuesto de Patrimonio en todo el mundo, excepto en España, por su escaso impacto recaudatorio así lo demuestra. Por no hablar de su carácter confiscatorio, al gravar dos veces determinadas rentas, motivo por el que fue declarado inconstitucional en Alemania.

El FMI plantea la tasa Covid como un impuesto temporal, pero es falacia, porque ya sabemos que los políticos tienen el gatillo fácil para crear impuestos, pero no tanto para eliminarlos. Que le pregunten a los alemanes, que llevan treinta años pagando un recargo de solidaridad que se les anunció como transitorio para costear la reunificación del país, o a los franceses, que han visto cómo el im-

puesto temporal a la fortuna fue mutando desde 1945 hasta perpetuarse, en su última versión como gravamen sobre los bienes inmuebles.

¿Y a quienes consideramos ricos? Para Podemos son los que ingresan a partir de 60.000 euros al año. Es el umbral que fijaron en las negociaciones con el PSOE para subir el IRPF este año. ¿Van a imponerse a sí mismos Pablo Iglesias y los más de 100 cargos que ha colocado en el Gobierno con sueldos por encima de ese nivel una tasa Covid? Cuesta creerlo. Más probable parece que, como sucede siempre que se anuncian medidas de “justicia fiscal”, la acaben pagando sólo los asalariados, pese a estar entre quienes más han sentido en sus bolsillos el impacto de esta crisis.

¿Y por qué tendrían que asumir el coste de las medidas frente a la pandemia los dueños de grandes empre-

sas, la mayoría de las cuales cotizan en Bolsa y están en manos de pequeños accionistas que verían penalizado su ahorro y las expectativas de recibir dividendos de sus inversiones? Sobre todo cuando sabemos que gobiernos como el español dedican los fondos contra la crisis al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por sus vínculos con Venezuela o a inflar los gastos de los ministerios que controla Podemos.

Por eso no es una buena idea que el FMI dé alas al populismo fiscal de la izquierda. Más oportuno sería que pida a los gobiernos que, para reducir el exceso de deuda generado durante la pandemia, recorten el gasto burocrático y también el destinado a sostener organismos mastodónticos que muestran ser tan poco eficaces como el propio FMI o la OMS.

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN